

*Recuratoria de la Suprema Corte de Justicia.**

México, Febrero 18 de 1875.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por D. Diego G. Lavin, contra unos acuerdos del Ayuntamiento de esa Ciudad, por los que se impusieron al quejoso mayores derechos por las corridas de toros que ha estado dando en la plaza de su propiedad, que los contrató por escritura pública al establecer dicha plaza. Visto el informe del Ayuntamiento; la prueba rendida por el promovente; el pedimento del C. Promotor fiscal; la sentencia del inferior y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente, se declara: Que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de San Luis Potosí, en 23 de Noviembre del año próximo pasado, que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. español Diego G. Lavin, contra los acuerdos del Ayuntamiento de 7 de Octubre del año de 1873 y 19 de Junio del año pasado, que dieron causa á la promocion del presente recurso.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron:—*José María Iglesias.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*

El que suscribe, certifica: que aunque el C. Magistrado Garza asistió á la votacion de este amparo, no aparece en el su firma, porque en esta fecha en que se ha puesto

TOMO VII—PARTE II.

en limpio la anterior sentencia, ya se ha separado de ésta Capital y está en marcha para la de Guatemala. México, Febrero 27 de 1875.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 27 de 1875.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila, y seguido en el de Distrito de Nuevo Leon, por varios comerciantes, contra la determinacion del Ayuntamiento del Saltillo, de que trasladaran á un lugar determinado sus expendios de carne.

Pedimento del C. promotor Fiscal.

Ciudadano Juez de Distrito:

Los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Este principio altamente filosófico, está consignado expresamente en el artículo 1º de nuestra Constitución federal. Los Legisladores de 57 sabian muy bien que sin garantías individuales no era posible una buena organizacion social. Por esto se ocuparon con preferencia de señalarlos, poniendo á la vez un dique que contuviera los desmanes de las autoridades, en perjuicio de cualquiera individuo que se viera amagado en sus derechos.

Al poder judicial le fué encomendada esta noble facultad; y á pesar de la oposicion que se hizo al crear esta institucion, estamos viendo diariamente los beneficios de su influencia moralizadora. Ya no sucede como decia el señor Ocampo en una de las sesiones del Congreso constituyente: "Hasta ahora en cuanto á infracciones de la Consti-

tucion, el sistema ha sido, que el agraviado se queje á gritos con el fin de desprestigiar á la autoridad, que el desprestigio se extienda de corrillo en corrillo y de plaza en plaza; que al fin se propague una opinion y se recurra á una revolucion."

Todos los ataques á la Constitucion son contenidos en la mayor parte de los casos sin escándalo; y desde las disposiciones del Supremo poder Legislativo de la Union, hasta los actos de las autoridades ménos caracterizadas de los Estados, tienen un correctivo eficaz, cuando envuelven un abuso ó desman en perjuicio, no digo ya de un ciudadano de la República, sino de cualquiera de sus habitantes; pues las garantías individuales no son exclusivas de los ciudadanos mexicanos: son los derechos del hombre que vive en sociedad.

El caso que hoy se ofrece á la consideracion del Juzgado de Distrito de Coahuila, es el siguiente:

El H. Ayuntamiento de esta ciudad, de acuerdo con el gobierno del Estado, celebró un contrato con D. Jesus Montes, para que éste construyera por su cuenta un edificio en la plazuela del Cármen, destinado á la venta de carnes y semillas. Estando ya concluido parte del edificio, los expendedores de carnes recibieron una orden verbal de la presidencia del Ayuntamiento, para que en un término breve cambiaran sus expendios al lugar designado, en la inteligencia de que si no lo verificaban, se les mandarian cerrar sus establecimientos, sufriendo además la multa de veinticinco pesos.

Algunos de los expendedores promovieron juicio de amparo contra la disposicion mencionada, por creer que con ella se les violaban las garantías que la Constitucion otorga en sus artículos 4, 14, 16 y 28; solicitando la suspension del acto reclamado, para evitarse los perjuicios que les irrogarian.

Conforme al art. 59 de la ley de 20 de Enero de 1869, se pidió informe á dicha autoridad, y contestó en los términos de

su comunicacion, fs. 7 á 11, manifestando entre otras cosas: que al dictar la orden que ha motivado este juicio, no se violaba ninguna garantía, porque la fraccion 2ª del art. 83 de la Constitucion del Estado, y el art. 18 de las Ordenanzas municipales, ponen en las atribuciones de los Ayuntamientos, la comodidad, ornato y salubridad en las poblaciones: que hacia mucho tiempo que el Ayuntamiento veia con disgusto el mal aspecto de los expendios de carnes y sus condiciones tan faltas de higiene, que bastaba permanecer en ellos durante la noche, para que al dia siguiente se encontrasen en estado de putrefaccion: que encontrándose diseminados los expendios en distintos puntos de la Ciudad, se hacia imposible la vigilancia por el comisionado del ramo y los agentes de policía; y que para obviar estos inconvenientes y mas que todo, tratando de evitar que se desarrollara una peste, el Ayuntamiento habia dispuesto que provisionalmente, y mientras el Congreso del Estado aprobaba el plan de arbitrios que se le habia propuesto, se cambiaran los expendios al edificio que con tal objeto se estaba construyendo en la plaza del Cármen: que no se les atacaba la libertad de que se ocuparan en el giro á que estaban dedicados, pues solamente se les obligaba que lo hicieran en determinado punto.

El fiscal creyó que la disposicion del Ayuntamiento atacaba la libertad del trabajo, creando á la vez un monopolio, un privilegio en favor de una persona determinada; y por esto pidió la suspension del acto que se reclamaba, solicitando del Juzgado, que los que habian promovido el recurso de amparo, interinamente, y mientras se sustanciaba el juicio, continuaran en sus respectivos establecimientos; y que cuatro de ellos que habian sido puestos en la cárcel por negarse á cumplir la orden del Ayuntamiento, se les mandara poner en libertad.

El Juzgado decretó de conformidad, en su auto fecha 11 de Enero próximo pasado;

pero á pesar de esta resolución, el presidente del Ayuntamiento se negó á obsequiarla, en lo relativo á poner en libertad á los quejosos, dando por razón, que la parte final del art. 29 de la ley de 20 de Enero de 1869, previene que los jueces de la Federación se limiten á proteger y amparar en el caso especial sobre que versa el proceso.

Se ha dado una interpretación viciosa al artículo de la ley orgánica citada, pues así la letra como su espíritu, quieren que la sentencia en los juicios de amparo, se ocupe solamente de los que lo soliciten, sin hacer declaraciones generales de las leyes ó actos que los motivan (art. 102 de la Constitución.) El objeto de esta prescripción, ha sido el de introducir una excepción en favor de los que intentan el recurso: son derogaciones parciales de la ley ó acto que los motiva, que favorecen exclusivamente á la parte que reclama.

El Juzgado no ha hecho ninguna declaración general respecto de la providencia dictada por el presidente del Ayuntamiento, sino que se limitó á suspender el acto que se reclamaba; y como la prisión á que se redujo á cuatro de los quejosos, fué precisamente porque no cumplan una orden que les violaba sus derechos, y que había dado origen al recurso que intentaron, obró dentro de la órbita de sus atribuciones, mandando que se los pusiera en libertad.

El presidente del Ayuntamiento no debió hacer observaciones de ninguna especie, pues aunque el mandamiento del Juzgado de Distrito fuera ilegal, su deber era obsequiarlo, porque quien lo dictaba era competente, tratándose de la aplicación de las leyes protectoras de los derechos del hombre.

En vista de esta negativa, se requirió al gobierno del Estado, por ser el superior inmediato del presidente del Ayuntamiento, á fin de que hiciera cumplir en todas sus partes la orden de suspensión; pero no obstante esto requerimiento y la contestación que se dió, manifestando que ya se libraba

la orden para que el presidente del Ayuntamiento acatara en todas sus partes la disposición del Juzgado, los quejosos continuaron presos hasta extinguir los ocho días de cárcel á que fueron condenados.

Con razón asienta el Sr. Castillo Velasco, en sus sábias lecciones de derecho constitucional mexicano, las siguientes palabras: «Lamentable ha sido la facilidad con que en la República se ha privado al hombre de su libertad reduciéndolo á prisión, y desde mucho tiempo hace llamaba la atención de los pensadores, esa facilidad, así como las dificultades que se ofrecen en cada caso para que el preso recobre su libertad. Desde las autoridades mas elevadas en gerarquía, hasta los últimos agentes de justicia ó de policía, todos han podido verificar aprehensiones, sin mandamiento escrito, sin los requisitos que la Constitución prescribe, y aun hoy mismo son frecuentes los procedimientos que carecen de los requisitos constitucionales. En vano las leyes comunes han constituido preceptos iguales á los que expresa el art. 18 de la Constitución. La frecuencia con que se infringieron, hizo necesario elevar esos preceptos á la categoría de artículos constitucionales y asegurar su cumplimiento con la responsabilidad hasta de los agentes mas subalternos.»

No queda, pues, otro recurso respecto de la prisión sufrida por los quejosos, que la responsabilidad que establece el art. 21 de la ley de 20 de Enero de 1869, por ser un acto consumado á pesar de la orden de suspensión que dictó el Juzgado.

Pasa el fiscal á ocuparse de la cuestión principal de este juicio: de la anticonstitucionalidad que entraña la orden del Ayuntamiento, para que los expendedores de carnes solo puedan tener sus establecimientos en el local construido por D. Jesus Montes. Mas antes de entrar en materia, cree de su deber hacer una manifestación franca y sincera de la justa gratitud á que se ha hecho acreedor el laborioso empresario, por sus loables descos de contribuir al embelle-

cimiento y ornato de la ciudad. El que suscribe, hace esta referencia, á fin de manifestar sus buenos deseos respecto del Sr. Montes; y que si tal vez hiere sus intereses al tratar la presente cuestion, lo hace solo por el deber que le impone su ministerio.

A pesar de nuestras instituciones liberales, subsiste aún la tendencia al reglamentarismo del trabajo: resentimos todavía de la pésima educacion colonial. La Constitucion de 57 que elevó al rango de preceptos constitucionales las verdades económicas que ha conquistado la ciencia, no ha producido en este respecto los resultados prácticos que eran de esperarse; porque como dice Laboulaye, cada reforma política necesita una nueva educacion; y por cierto que nosotros, antes de 57, no estábamos educados para las prácticas liberales.

El Ayuntamiento ha querido prestar un servicio á la ciudad, celebrando con Montes el contrato que ha dado margen á este juicio; pero como él viene á establecer un monopolio, una prohibicion en favor del contratista, hiriendo á la vez las garantías de los que están dedicados al expendio de carnes, por privarlos del libre ejercicio de su trabajo, debe quedar sin efecto respecto de los que han promovido el recurso.

El art. 4º de la Constitucion, establece que todo hombre es libre para abrazar la profesion, industria ó trabajo que le acomode, siendo útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos: que ni uno ni otro se le podrá impedir sino por sentencia judicial, cuando ataque los derechos de tercero, ó por resolucion gubernativa, dictada en los términos que marca la ley, cuando ofenda los de la sociedad.

Es fuera de duda que es de suma importancia el trabajo de expender carnes, pues que ésta constituye nada menos que uno de los artículos de primera necesidad.

Oree por demás el Promotor decir, que es un trabajo honesto, pues que su ejercicio no envuelve ninguna inmoralidad.

Respecto del perjuicio que con él recien-

ta la poblacion, por encontrarse los expendios en circunstancias tan poco higiénicas, como afirma la presidencia del Ayuntamiento, y que pudiera ser causa de que se desarrollara alguna epidemia, no cabe duda que es una verdadera exasperacion, pues hasta ahora siempre se han expendido las carnes en las mismas condiciones en que hoy se hacen; y es bien sabido que esta Ciudad es una de las mas salubres que existen en la República.

Durante el término de pruebas, se ha justificado plenamente que los expendios se encuentran en piezas ventiladas, no habiéndose dado el caso de que en ellos se hallan vendido carnes descompuestas; y que estando distribuidos en diferentes puntos de la Ciudad, el público se abastece fácilmente de este artículo. No hay, pues, un temor fundado de que se ofendan los derechos de la sociedad, ni procede por lo mismo la resolucion gubernativa que se ha dictado.

La circunstancia de presentar un aspecto desagradable esos establecimientos, no es bastante para obligar á los expendedores á que los cambien al local construido en la plazuela del Carmen, porque á título de proteccion á ese ramo, se establece un verdadero monopolio prohibido por la Constitucion.

Si las carnes solo pueden expenderse en el local que se ha construido con ese objeto; y si él pertenece á la propiedad del contratista como se ha justificado suficientemente, ¿quién podrá asegurar que este señor, no vendrá á ser con el tiempo el solo expendedor del artículo? Esta sola circunstancia seria bastante para justificar la anticonstitucionalidad de la obligacion que se les ha impuesto á los expendedores, puesto que quedarían impedidos de ejercer el trabajo á que están dedicados.

Un economista moderno, D. Guillermo Prieto, ha dicho: que los individuos en la calificacion de sus conveniencias privadas, son siempre mas aptos que los gobiernos;

y que sean los que fueren los inconvenientes de la libertad, producen siempre mejores efectos que las trabas y ligaduras puestas al cuerpo social, que en último resultado, le acarreo la parálisis, el embrutecimiento y la muerte.

Como prueba de los buenos resultados que produce la libertad del trabajo, el Fiscal recuerda que no ha mucho tiempo en la Capital de la República, estaba prohibido que se expendiera el pulque en los lugares mas céntricos de la Ciudad. Esta restriccion mantuvo por mucho tiempo aquellos establecimientos en un estado deplorable, hasta que el Sr. Montiel, Gobernador del Distrito, dispuso que podian establecerse en cualquier punto; y desde entonces mejoraron de tal manera, que puede decirse sin exajeracion que algunos de ellos se encuentran tan elegantes como el café de Fulcheri y la Concordia, que son por cierto un tipo de buen gusto.

Si á los expendedores de carnes se les deja en libertad para que establezcan sus expendios en los lugares que mas les convengan, es seguro que siempre se encontrarán en mejores circunstancias que los que ha mandado construir la municipalidad; porque es muy lógico creer, que harán todo lo que esté de su parte por mejorarlos, á fin de obtener un buen consumo.

Este deseo entablaria competencias, que afluirán en beneficio del público. Pero si por el contrario, se les obliga á que los tengan en un local que no es de su propiedad, seguirán presentando el aspecto repugnante que tanto ha preocupado al Ayuntamiento. Porque á la verdad, los expendios que se han construido, no aventajan á los antiguos, como se ha probado, y si se hace uso de ellos, se destruye hasta la esperanza de que se mejoren esta clase de establecimientos.

La comunicacion del consejo de salubridad que se acompaña como justificante del informe, manifiesta que todas las materias animales comienzan á descomponerse á las cuarenta y ocho horas, siendo éste el tiem-

po que podrán permanecer las carnes en las localidades que existen en la plaza de toros, para que no resulte un perjuicio notable á la poblacion.

Como se ve, el informe del consejo, se refiere exclusivamente á los expendios de la plaza de toros; pero la mayor parte se encuentran en otros lugares, segun consta en el informe del Presidente del Ayuntamiento, pues en él se dice: que una de las circunstancias que se tuvieron presentes para mandar construir el mercado de la plaza del Carmen, fué la dificultad de que los expendios pudieran ser vigilados por el comisionado del ramo y los agentes de policía, por encontrarse diseminados en distintos puntos de la ciudad.

Respecto de los referidos expendios, bastará que el Ayuntamiento, en uso de sus atribuciones, acuerde que no permanezcan las carnes mas tiempo del que se ha fijado por la Junta de Salubridad, y esto será suficiente para destruir el peligro de que se desarrolle una epidemia.

Con lo dicho, cree el fiscal suficientemente fundada su opinion de que procede el amparo en el caso presente; y concluye por lo mismo, pidiendo al Juzgado, que con fundamento en los arts. 4º, 16, 28, 101 y 102 de la Constitucion, se sirva así decretarlo.

Saltillo, Febrero 3 de 1873.—*Lic. Santos de la Garza y Gutierrez.*

Es copia que certifico ser de su original, que se registra en el expediente respectivo de la foja 35 á la 42 frente. Monterey, Diciembre 17 de 1874.—*Pablo Borrego,* secretario.

Sentencia del C. Jues de Distrito.

Monterey, Diciembre 2 de 1874.

Visto este juicio de amparo promovido por varios especuladores en el ramo de carnes de la Ciudad del Saltillo, contra el auto del Ayuntamiento de la misma Munici-

palidad, por el que celebró un contrato con el C. Jesus F. Montes, para que éste construyera un edificio bajo determinadas condiciones en la plaza del Carmen, á fin de que allí se vendieran las carnes y semillas para el abasto de la poblacion, con derecho de cobrar el empresario dos reales por cada casilla ó departamento en que se verificara el expendio, sin que se pudiera cambiar tal contrato por el término de veinticinco años, en recompensa de lo que tenía que pagar por el terreno y costos del edificio, quedando en libertad los que tenían mantanzas, de seguir vendiendo en ellas, y los expendedores de semillas para llevarlas ó no á vender al expresado edificio, y solo obligados los demás expendedores de carnes á hacer su venta en el local que se ha designado, por creer los querellantes que con tal contrato se les restringe la libertad del trabajo, obligándolos á ejercerlo en determinado lugar; porque se les conmina con una multa ó ponerlos presos si no cambian sus expendios al punto designado, sin haber ley que dé esa facultad; porque se les molesta en sus personas por quien no tiene autoridad ó competencia para dictar esa clase de disposiciones; y porque se establece un monopolio en favor del expresado Montes, al facultársele para que solamente él pueda cobrar por el local del expendio; violándose así las garantías que otorga la Constitución General en sus arts. 4, 14, 16 y 28.

Visto el informe del Ayuntamiento en que manifiesta: que no se ha violado ninguno de los artículos de la Constitución, de que se quejan los presentantes; porque no se ha impedido á los expendedores de carnes que ejerzan su profesion, sino designándoles el punto en que lo han de hacer; por que se les ha conminado con una multa si no obedecen, lo cual no puede tenerse como sentencia; porque á cargo de los Ayuntamientos están los ramos de salubridad, comodidad, ornato y recreo; porque á nadie se ha negado que construya otro edificio igual ó mejor que el del empresario, y por

que el contrato fué aprobado por el Superior Gobierno del Estado.

Visto el auto del Juzgado de Distrito de Coahuila en que mandó suspender el acuerdo del Ayuntamiento, disponiendo que no fueran obligados los expendedores de carnes á cambiar sus expendios, y que se pusieran en libertad á los que se encontraban presos por ese motivo. Vista la comunicacion del mismo Ayuntamiento, en que dice, obsequia la Orden de suspension por lo que toca al cambio de los expendios; pero que no cree tener el mismo deber por lo que respecta á los que estaban presos, porque á éstos les habia impuesto ocho dias de arresto por faltas al respeto.

Vistas las pruebas rendidas por los quejosos y su alegato para fundar sus pretensiones; lo expuesto por el C. Promotor fiscal pidiendo que sean amparados los querellantes, y que se exija la responsabilidad al Presidente del Ayuntamiento por no haber obsequiado en todas sus partes la Orden de suspension; las diversas excusas y recusaciones de los CC. Jueces de Distrito propietario y suplentes del Estado de Coahuila, y por lo que pasó el presente negocio á éste de mi cargo; las varias citaciones que se hicieron á los querellantes por medio de requisitorias y avisos en el *Perifoneo Oficial*, para que se presentaran por sí ó por apoderado á continuar el juicio, con apercibimiento de que si no lo hacían, se les tendria como desistidos, habiendo ocurrido solamente los CC. Julian Perez y José Angel Morales por medio de apoderado, y no los demás; y visto por último, todo lo que consta de autos y la citacion para sentencia.

Y considerando: que por el acuerdo del Ayuntamiento del Saltillo, no se impide á los especuladores y expendedores de carnes que ejerzan su profesion, sino únicamente que la vendan donde ellos quieran, determinándoles el lugar en que lo han de hacer, quedando en libertad de expendir si cum-

plen con las condiciones que se les han impuesto.

Que los ramos de comestibles y especialmente el de carnes, siempre han estado y están bajo la vigilancia de los Ayuntamientos, tanto para que no se vendan los de mala calidad con perjuicio del público, como para poderse cobrar algunas pensiones propias del Municipio.

Que si los municipios tienen tal vigilancia, pueden determinar las reglas para ejercerla, siendo una de ellas, la de que las carnes se expendan en determinado punto, para que sea mas segura su inspeccion en favor del público.

Que los expendios de carne, en lo general, tienen mal aspecto y afectan la higiene pública, sobre lo que tambien debe velar la autoridad política.

Que el acuerdo del Ayuntamiento deja en libertad á los dueños de semillas para que las expendan en el punto que mas les acomode.

Que los municipios tienen facultades conforme á las leyes, como las tiene el del Saltillo, segun la fraccion 2ª del art. 83 de la Constitucion de Coahuila, para imponer multas y arreatos, sin figura de juicio á los que no cumplan sus acuerdos.

Que de estos antecedentes, se sigue, que el Ayuntamiento ha tenido facultades para fijar el punto en que se han de expender las carnes y para castigar á los que no cumplan con sus disposiciones; no habiéndose violado por tanto, las garantías que otorga la Constitucion en sus artículos 4º, 14 y 16.

Que las municipalidades tienen derecho de imponer pensiones á los que se dedican al ramo de carnes, como la Nacion y los Estados lo tienen para decretar impuestos que cubran los gastos públicos; y aquel derecho es el que ha cedido en parte el Ayuntamiento del Saltillo para cobrar dos reales por cada casilla en que se expendan la carne, sin perjuicio de otros derechos municipales, lo cual no constituye un monopolio, sino la

cesion de una cuota que debia cobrar la municipalidad, no habiendo violado por lo mismo la garantía que otorga el art. 28.

Que á los propietarios de fincas se les puede prohibir que las arrienden ó las dediquen por sí mismos á objetos que perjudiquen los derechos de tercero ó á la salubridad pública, que es superior á todos los derechos, como establecimientos insalubres ó peligrosos, como son sin duda los expendios de carnes; no haciéndose en consecuencia, agravio alguno á los que se les impido un hecho que daña á la sociedad.

Que todas las autoridades, por elevado que sea su rango, deben ser esclavas de la ley, no conviniendo que se sienta bajo ningún aspecto el precedente peligroso de dejar á la autoridad contra quien se pide unparo, la calificación de la justicia de sus actos; y en el presente caso, el Presidente del Ayuntamiento del Saltillo, que fungia en Enero del año pasado, no obedeció la disposicion del Juez de Distrito en la parte que mandó poner en libertad á algunos de los expendedores de carne que estaban presos.

Que el mismo Presidente de la Corporacion del año de 1873, consumió de un modo irremediable el acto reclamado, como consta de su comunicacion de fs. 18, en cuyo caso debe encausarse al inmediato ejecutor, conforme al art. 21 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Que aunque se hizo el requerimiento al superior de la autoridad ejecutora, para que hiciera que ésta llevara á efecto la Orden de suspension del Juzgado de Distrito, no aparece que dicho superior dejara de cumplir con la ley, y antes consta de autos, fojas 32, que dió Orden al ejecutor para que obsequiara lo dispuesto por el Juez de Distrito.

Que la mayor parte de los quejosos abandonaron el juicio y no comparecieron á seguirlo, ni por sí ni por apoderado legítimo, no obstante de haber sido citados, con apercibimiento de que si no ocurrían, se les tendria como desistidos.

Y visto y considerado todo lo que ver y considerar convino, y de conformidad con lo expuesto, con los artículos 2º, 7º y 21, de la ley de 20 de Enero de 1869, y 101 y 102 de la Constitución, el C. Juez de Distrito de Nuevo Leon, definitivamente juzgando, dijo:

1º Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á los CC. Julian Perez y José Angel Morales, en la queja de que se trata, y que entablaron con otros, contra los actos del Ayuntamiento del Saltillo.

2º Que se ha por desistidos del presente juicio á todos los que no concurrieron á continuarlo, á pesar de haber sido citados.

3º Que se saque copia de lo conducente y se mande al C. Juez de Distrito de Coahuila, para que forme la causa correspondiente al C. Presidente del Ayuntamiento del Saltillo, que fungia en 18 de Enero de 1873, por no haber obsequiado la Orden de suspension del Juzgado de Distrito del mismo Estado.

4º Notifíquese, sáquense las copias de estilo y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El expresado C. Juez así lo resolvió y firmó por ante mí el Secretario: doy fé.—*Lic. J. Valdes Gómez.—Pablo Borrego, Secretario.*

Es copia que certifico.—Monterey, Diciembre 17 de 1874.—*Pablo Borrego, Secretario.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 18 de 1875.

Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila, por Julian Perez, Rafael Rodriguez, Clemente Cabello, Francisco Valdéz, José Angel Morales, Florencio Aguirre, Felipe Ramos, Felipe Barrientos, Felipe Martinez, Juan Roman por sí y por su padre Guillermo, Rafael Nieto, Jesus Gil, José M. Acuña, José M. García Acuña, Sotero Ro-

driguez, J. M. Bonilla y Andrés M. Aguirre, contra la providencia dictada por el Ayuntamiento del Saltillo, por la cual se les ha ordenado trasladar sus expendios de carnes en esa ciudad, al edificio llamado Marqueta, con apercibimiento de que de no hacerlo así, dentro del término señalado, les sería impuesta una multa de veinticinco pesos, providencia que en concepto de los quejosos, vulnera las garantías que consignan los artículos 4º, 14, 16, 27 y 28 de la Constitución de la República: Visto el informe justificado de la autoridad; las pruebas rendidas, el parecer fiscal, el fallo del inferior, con cuanto mas se tuvo presente y ver convino, y

Considerando: que conforme al art. 4º de la Carta Fundamental, las autoridades administrativas no tienen facultad para impedir ni restringir la libertad de la industria y del comercio, que proclama el mismo artículo, á no ser en los casos en que se encontraren atacados los derechos de la sociedad.

Considerando: que la resolution que prohibe á los expendedores de carnes del Saltillo, ejercer su industria y comercio en cualquiera otro lugar de la poblacion que no sea el edificio dedicado á este objeto; es una restriccion á la libertad del trabajo, que en ninguna manera reclama el interés de la comunidad, pues en general, el comercio en que se ocupan los quejosos, no ofrece un peligro inminente para la salubridad pública, que reclama medidas semejantes á la que ha dado origen á este recurso; ni aparece justificado en autos que existieran circunstancias especiales en el caso presente, que hubieran hecho indispensable dictar esa resolution.

Considerando: que si bien el C. Juez de Distrito de Nuevo Leon, á cuyo conocimiento pasó este negocio, por las diversas recusaciones y excusas de los jueces propietario y suplentes de Coahuila, ha dado por desistidos del recurso á los que no concurrieron á continuarlo ante su Juzgado; esta

resolución es contraria al art. 24 de la ley de 20 de Enero de 1869, que previene que en los juicios de amparo, el juez siempre proceda adelante, hasta pronunciar sentencia definitiva sin detenerse porque no agiten las partes, y que la presencia de éstas, no tenía ya objeto, por estar pendiente el negocio únicamente de que el C. Juez pronunciara el fallo definitivo.

Por éstas consideraciones y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución Federal y 24 de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

1º Se revoca la sentencia pronunciada por el C. Juez de Distrito de Nuevo Leon, en la parte en que da por desistidos del recurso, á los promoventes que no ocurrieron á continuarlo, así como en la que niega el amparo de la Justicia Federal á los CC. Julian Perez y José Angel Morales.

2º Se da por desistidos á su perjuicio, por haberlo solicitado así expresamente, á los CC. Sotero Rodriguez, Clemente Cabello, Rafael Rodriguez, Francisco Valdés, Juan y Guillermo Ruman y José María Acuña.

3º La Justicia de la Union ampara y protege á Julian Perez, José Angel Morales, Florencio Aguirre, Felipe Ramos, Felipe Barrientos, Felipe Martinez, Jesus Gil, José M^a García Acuña, José M^a Bonilla y Andres R. Aguirre, contra la providencia del Ayuntamiento del Saltillo, que ha dado origen al presente recurso.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron:—*José María Iglesias.*—*M. Auza.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*

TOMO VII.—PARTE IV.

Certifico que los CC. Ministros Juan J. de la Garza y Simon Guzman, intervinieron en la votacion de este amparo, y que por haberse ausentado de esta capital el primero, y estar imposibilitado de firmar el segundo por causa de enfermedad, no aparecen en la sentencia anterior, sus respectivas firmas. México, Abril 5 de 1875.—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 5 de 1875.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por Donaciano Dorado y Severo Gutierrez, contra la Jefatura política de la capital de ese Estado, por haber mandado que se les ponga grillete para que extingan sus condenas.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

Al Juzgado de Distrito:

El Jefe de Hacienda del Estado, desempeñando las funciones de Promotor fiscal por Ministerio de la ley, dice: que Donaciano Dorado y Severo Gutierrez, presos en la cárcel de ésta Ciudad, piden amparo, fundándose en que se encuentran atados con una cadena al pié, lo cual constituye una pena infamante, contra lo dispuesto en el art. 22 de la Constitución General, interpretado ya por la Suprema Corte de Justicia.

Admitido el recurso, se pidió informe á la autoridad política, quien manifiesta, que los expresados individuos han sido condenados el primero, por el Supremo Tribunal de Justicia á cuatro años de prision, y el segundo, por la Jefatura política del Fres-